



Análisis de coyuntura

Los vórtices de Guatemala

IPNUSAC

Los vórtices son flujos turbulentos en rotación espiral, con trayectorias de corrientes cerradas. Se trata de rotación de fluidos que, metafóricamente aplicada al análisis de la vida social y la historia, diversos eventos parecieran moverse en péndulo o bien asemejando a los vórtices. Las oportunidades que otorga la naturaleza incluso permiten que insectos beneficiosos como las abejas tomen energía de tales remolinos y ventiscas: al generarse arrastres, ello mejora la velocidad y el vuelo.

En el campo social también hay turbulencias, cambios repentinos, y tomando prestado de la naturaleza, el análisis social bien reconoce que el caos se auto organiza, se crean rizos de retroalimentación y el microsistema o bien el sistema amplio y complejo empieza a reorganizarse. La vida social está en constante movimiento y las demandas sociales se acumulan, principalmente cuando en la arena política la mayoría de cuestiones socialmente contradictorias no se catalizan adecuadamente. La política pública es entonces un

instrumento de avance social, o bien de involución, según sea la época.

Dependerá de muchos elementos que esas nuevas formas puedan perdurar, o bien el cambio social, e incluso la involución, podrá conllevar a diferentes derroteros en los que es preciso el análisis de la coyuntura, las prognosis y por supuesto las propuestas como las que ha venido planteando la Universidad de San Carlos en la propuesta de Agenda Estratégica 2020-2024.¹

1. Véase, *Agenda estratégica 2020-2024, Una propuesta desde La Universidad de San Carlos de Guatemala*. Accesible en <http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2019/05/Agenda-Estrategica-Nacional-completo.pdf>

Afirmar que hay una turbulencia social en la Guatemala de hoy es un recordatorio obligado en el análisis del acontecer nacional. Esa turbulencia puede ser un detonante, en donde el pánico social gane adeptos, o bien el acomodamiento y la indiferencia movida por la andanada mediática, provoque inacción, en un ambiente de anomia e inestabilidad larvada, que se expresa a través de conflictividades sociales diversas que, vistas superficialmente parecen a veces poco conectadas, pero finalmente originadas en una crisis estructural profunda, que hunde sus raíces cuando menos en medio siglo de la historia nacional.

Ciertos análisis de coyuntura son indiferentes a la conflictividad; sin embargo, autores como Ralf Dahrendorf, el teórico de la conflictividad, intentan combinar paradigmas para guiar el análisis hacia un consenso que bien reconoce las grandes rigideces e injusticias del desigual mundo de hoy. Los conflictos pueden provocar cambios, y si llegan a ser graves, los cambios serían radicales: el juego de la coyuntura está en eso, y como suele observarse en estas páginas, se manifiesta en el autoritarismo, la simulación de legalidad (que en realidad cobija impunidad), la criminalización

de la lucha social, la represión y amenazas, acompañadas hoy por una sociedad de la información que avasalla y distorsiona la comprensión de la realidad objetiva.

El vórtice ártico desde el Norte

Como vórtices polares que en marzo se trasladan hacia los climas más calientes del sur provocando torbellinos, las advertencias de altos funcionarios de la nueva administración demócrata en Estados Unidos, encabezada por el presidente Joe Biden, siempre estremecen a élites económicas y clase política.

Durante la primera quincena de marzo, como es sabido, quedó básicamente consumada la designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2025. Los grandes nominadores –los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial– parecen haber hecho caso omiso a las presiones del Norte y aparentan estar dispuestas a resistir a los vórtices árticos diversos que, según muestra la experiencia histórica, sí que conmueven el panorama político-jurídico e institucional del país.

El pasado 10 de marzo la Asociación de Amigos del País, ante los procesos de designación de los magistrados de la CC emitió un ilustrativo comunicado, invocando artículos constitucionales que establecen con claridad, según tal agrupación, que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano. Además se exhorta a los ciudadanos a defender tal independencia, en clara alusión a *“los agentes extranjeros”*, que en este caso aluden, sin nombrarlos, a la embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado, además de senadores demócratas de peso, que han sido expresos en las dudas que tal proceso ha representado.

La quincena ha sido abundante en deliberaciones jurídicas en torno al sistema de justicia y la elección de cortes. Según Jon Piechowsky, subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado: *“el tema de la Corte de Constitucionalidad no está acabado”*: tras la designación completa de la nueva corte, el funcionario como otros tantos insisten en la lucha en contra de la corrupción y la impunidad.²

Emulando la era Obama, se proponen cerca de US\$ cuatro millardos para iniciativas diversas de desarrollo en los países del norte centroamericano, pero altos funcionarios del gobierno del presidente Biden se apresuran a subrayar que *“nada del dinero que queremos obtener del Congreso y de los contribuyentes de EE.UU. irá a los líderes de esos Gobiernos”*, afirmó [Roberta] Jacobson en una rueda de prensa en la Casa Blanca... La funcionaria explicó que Biden pondrá condiciones a los 4.000 millones que quiere entregar durante los próximos cuatro años al Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala).³

Es en ese rayado de la cancha por parte de Washington desde donde se advierte que el tema de las actuaciones e idoneidad de los magistrados electos seguirá siendo observado atentamente por Estados Unidos. Además, se subrayan iniciativas legales y reglamentarias que EE.UU. tiene para sancionar a individuos involucrados en corrupción.

2. Véase el Periódico, 11 de marzo de 2021, pag.8.

3. Véase “EE.UU. dice que ni un dólar de la ayuda a Centroamérica irá a sus presidentes”. EFE. Washington, 10 mar. 2021. En <https://www.efe.com/efe/america/politica/ee-uu-dice-que-ni-un-dolar-de-la-ayuda-a-centroamerica-ira-sus-presidentes/20000035-4484934>

Así, Hugo Rodríguez, subsecretario adjunto principal de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, bien advierte sobre una variada gama de herramientas a considerar para disuadir la corrupción en Guatemala, mientras destaca el trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Sugiere el trabajo palmo a palmo cerca de la FECI y otras fiscalías del Ministerio Pública, en tanto que apunta a que la denominada legislación Engel sería una herramienta oportuna.

Volviendo a los dicho por Jacobson, coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, cabe hacer notar que al contrario de lo convenido en la Declaración de París, y en los tiempos de Obama, de asignar recursos a los gobiernos e institucionalizar procesos, incluso los de USAID y INL (las principales agencias del desarrollo estadounidense) hoy la nueva estrategia apunta a las ONG del norte centroamericano: instituciones religiosas, programas para madres solteras, capacitación de jóvenes y grupos similares. Es decir, apoyo preferente a la denominada esfera pública, en contraposición a la estatal y la privada-empresarial. Un ejemplo concreto de lo anterior es la restauración del programa de

Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés) ante el hecho de que cerca de 3,250 niños migrantes fueron detenidos cuando intentaron entrar a EE.UU. de manera irregular en las últimas dos semanas según datos del diario *The New York Times*, según se dice en la ya citada nota de el Periódico del 11 de marzo.

Todo ello vino precedido de una tele conversación entre el presidente Biden y el guatemalteco Alejandro Giammattei, en la cual se abordaron los temas que más preocupan en el Norte: la incidencia del crimen organizado y la corrupción, que provocan procesos incontenibles como la marea humana migratoria.

La migración y la economía en el tapete

Un componente de la estrategia del gobierno de Biden sobre la migración busca el apoyo a las oportunidades económicas. En el medio local, tanto migrantes potenciales como diversos actores -incluyendo los denominados coyotes- apuestan a que la administración demócrata será más tolerante incluso con el casi invisible y constante flujo de migrantes guatemaltecos por los

famosos pasos ciegos (por cierto, lo que más preocupa son los peligros que acechan a quienes emprenden la aventura, como lo confirma la dramática muerte de 16 migrantes guatemaltecos, en enero pasado, en el nortero estado mexicano de Tamaulipas).

Además en materia de políticas sociales y de desarrollo, el esperado bono demográfico de una población joven se esfuma con la diáspora, a veces con consecuencias fatales del destino personal, como lo muestra la citada masacre de migrantes provenientes de Comitancillo, o bien los constantes accidentes de vehículos de apoyo a la peligrosa e incierta búsqueda de nuevos derroteros.

Por el momento, el desmantelamiento de los albergues junto al Río Bravo y la presencia de un discurso más afín a los derechos civiles pregonados en EE.UU., parecieran despertar; a la vez, los incentivos de caciques locales y coyotes que viven del negocio de la migración. Esto, también desnuda las contradicciones de la denominada *"estabilidad macroeconómica"*, con su tipo de cambio estable, alimentado en

grueso número por el influjo de las remesas, sin que aún se diseñen programas que reorienten el gasto al desarrollo local y comunitario en las zonas geográficas más críticas.

El análisis económico en su relación con lo social y el vórtice de la diáspora, señala hacia el incremento de la pobreza, la inacción del Estado y la chatura de las mentalidades que forjan la política económica. Recientes estudios⁴ muestran un incremento de la pobreza en medio de la pandemia. Los porcentajes de indigencia se han incrementado en el denominado triángulo norte centroamericano, incluso tomando en cuenta los porcentajes de subsidios. Por ejemplo, en el escenario de pobreza de 2020, utilizando un parámetro de 3.2 dólares por día, Guatemala es el ejemplo más dramático con un porcentaje del 50 por ciento, aún después de la entrega de los apoyos sociales. Es interesante también observar cómo las brechas entre Guatemala y El Salvador se ensanchan, ejemplificando que la estabilidad política mayor del vecino sureño, y su actual realidad política superan con creces lo que acontece en la conservadora Guatemala.

Ver a este respecto: Oliva, Andrés y Maynor Cabrera (2021) El Covid19 ha exacerbado la pobreza y desigualdad en los países del triángulo norte, el Periódico 19 de febrero, Guatemala, pág. 18

Como bien lo afirman Oliva y Cabrera, la expectativa de cumplir con el cometido de reducción de la pobreza en el 2030, como ha sido la intención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, parece más bien alejarse de toda posibilidad objetiva, ameritando un abanico de soluciones rápidas para erradicar este mal estructural.

El vórtice de las nuevas mentalidades y la impermeabilidad nacional

Y hablando del vórtice proveniente de las gélidas tierras más cercanas al ártico, la condicionalidad de la Casa Blanca (que hoy resulta coyunturalmente positiva, al menos en el plano del estado de derecho) bien debiera provocar cambios de actitud y de pensamiento. Así también las nuevas políticas económicas que muy pronto estarán sistematizadas en los libros de texto. Nos referimos al primer logro de la Casa Blanca: la aprobación del masivo plan de estímulo económico por parte del Senado de EE.UU. Ello rompe con las viejas ideas de la estabilidad

macroeconómica y del enfoque trillado de las metas de inflación, y demanda de nuevos diseños de política financiera y fiscal para apoyar la protección social, entre otras grandes necesidades nacionales.

A pesar de que el plan de estímulo fiscal en EE.UU., dirigido para el 60 por ciento de los ciudadanos, ha afrontado la oposición republicana, el Senado ha aprobado el plan de rescate. En efecto, luego de una maratónica sesión, el pasado 6 de marzo aprobó el plan de US\$1.9 billones, únicamente con los 50 votos de los senadores demócratas, frente a 49 en contra de los republicanos, representando ello la primera victoria política de la nueva administración. De acuerdo a sus considerandos⁵ el plan resultará en la creación de unos seis millones de empleos y aumentará el producto interno bruto en US\$1 billón. El paquete de rescate es el tercero que se impulsa desde el inicio de la pandemia, tras el de US\$900 millardos aprobado en diciembre, y el de US\$2.2 billones refrendado en marzo de 2020, que fue el mayor en la historia económica de EE.UU.

5. Ver a este respecto: EFE/AFP (2021) Senado aprueba el plan de rescate de Biden por la pandemia, el Periódico 7 de marzo, pág. 8

Este último plan comprende la conocida ayuda social, incluyendo una transferencia directa a cada hogar, de ingresos menores a US\$80,000 anuales, equivalente a US\$1,400. Además contiene un rescate de US\$350 millardos para gobiernos locales y estatales y US\$170 millardos para la reapertura de escuelas, US\$14 millardos para fortalecer el plan de vacunación y otros US\$46 millardos para el sistema test COVID-19. Y, en adición, amplía hasta el 6 de septiembre las ayudas al desempleo por la pandemia, que iban a caducar el 14 de marzo, e incluye subsidios para alquiler y fondos para programas de comida, para aerolíneas, sistemas locales de transporte y la red ferroviaria.

Mientras ello sucede en EE.UU. en la Guatemala de hoy, el Ministerio de Finanzas simplemente afirma que sostendrá dos reuniones mensuales para revisar presupuesto, “olvidando” olímpicamente que la cuestión presupuestaria fue uno de los principales detonantes del descontento social en noviembre de 2020. En una circular, la 001-2021 del ministerio del ramo, informa que a partir de marzo se celebrarán simples reuniones en la Casa Presidencial

para “*readecuar el presupuesto*” y garantizar los planes institucionales.

La readecuación consiste en los clásicos “*raspados de olla*” que se celebran alrededor de finales de noviembre, pero ahora lentamente se siguen llevando a cabo, buscando bolsones, principalmente localizados en carteras como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Finanzas busca clavar el presupuesto cerca de los Q94 millardos, mientras que a la fecha se observan pobres ejecuciones en la mayoría de ministerios, principalmente aquellos que contienen los rubros de inversión.

Ello quiere indicar que las mentalidades fiscales de la Guatemala de hoy viajan a contracorriente del vórtice polar, con el agravante de que, llegados a la primera quincena de marzo, aún no se cuenta con un conjunto de normas presupuestarias aprobado, derivado que el anteproyecto de presupuesto presentado el 1 de diciembre, finalmente no fue aprobado por los diputados en su fecha límite -1 de diciembre- y desde esa fecha no existe una formalización global del presupuesto 2021 en todo su cuerpo normativo, como debe ser.

Las ansias de reactivación y sus lastres

Dentro de los análisis oficiales sobre empleo e inversiones, surgen los aplausos en torno a que a finales de febrero se registra un nuevo “logro” en materia de entrada de divisas por remesas. Euforia que confirma que, en la corta visión oficial prevaleciente, el crecimiento hacia afuera basado en la exportación de mano de obra es una de las consecuencias del ahora ya obsoleto modelo del ajuste estructural. Las remesas en febrero, reportan otro mes histórico, y suman más de US\$942 millones (La Hora, 5 de marzo de 2021), incluso muy superior al mes previo. En sólo dos meses los ingresos percibidos por este concepto han sido de US\$1,849, lo que proyecta una cifra anualizada de US\$11,000 millones superando incluso la suma de las exportaciones tradicionales y no tradicionales del sistema económico interno.

Los análisis en torno a estos números se asemejan a los publicados en esta revista: Guatemala se ha acomodado a una especie de “*enfermedad holandesa*”, término que se asocia con economías pequeñas y abiertas especializa-

das en la exportación de unos pocos bienes o servicios, y la asignación de factores productivos y además desvía la atención de otras prioridades de los procesos de planificación o asignación del gasto público o el privado. Al parar ese flujo, debido a múltiples causas, la crisis está a la vuelta de la esquina. Lo más dramático es que “exportar” personas significa en términos sociales y morales una salida poco conveniente en un mundo democrático y de búsqueda de oportunidades e igualdad.

Como advierte Oxfam (La Hora, 5 de marzo de 2021) la pobreza extrema podría aumentar del 19.8 por ciento al 22.7 por ciento, implicando también múltiples y nuevos rostros del hambre en Centroamérica, considerando además los impactos de las tormentas Eta y Iota en los medios de subsistencia. En tal sentido se anuncia, además, que la inseguridad alimentaria, que en algunas partes era leve, ahora presentará condiciones moderadas o severas, agudizando así otros avatares, tal es el caso de las enfermedades de diverso corte. En todo sentido, lo importante de conectar es migración con hambre y falta de oportunidades.

Tanto a nivel de la política oficial, y del plan de gobierno, las voces empresariales giran alrededor de

nuevas estrategias para la inversión. El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Fabián Juárez, en entrevista con *Radio Punto* el pasado 9 de marzo, hablando sobre hidroeléctricas, apuntaba que las inversiones de tal corte y el de industrias extractivas, como la minería, muy rápido pueden llegar a su punto de saturación. Los analistas nacionales e internacionales del sector privado invitan a nuevas opciones de atracción de inversiones con gobernanza y un equipo que las lidere (Prensa Libre, 4 de marzo de 2012). En opinión de Carlos Melo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, en Guatemala hay que buscar una aproximación a Estados Unidos como mercado, con formas creativas de nuevas cadenas de valor, en función de los distanciamientos que dicha gran economía tiene ahora con otras realidades económicas de grande y mediano calado.

Por su parte el viceministro de Inversión y Competencia, Lisardo Bolaños (Prensa Libre, 4 de marzo de 2021), comenta que con la Ley de Leasing⁶ se inicia un nuevo canal de oportunidades, principalmen-

te para las pequeñas y medianas empresas, y mejores facilidades para adquirir maquinaria y equipo con tasas de interés más bajas, sin tener historial crediticio, y junto a la Ley de *Factoring* se amplifican las opciones.

Bolaños avanza en sus anuncios indicando que se está llegando a acuerdos con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en relación con la ansiada Ley de zonas francas, que este instituto y sus investigadores estuvieron objetando durante la administración de Jimmy Morales, en virtud de que un dictamen de la propia SAT demostró que existiría una desviación de empresas formales hacia el nuevo territorio extra aduanero por crearse, y que pegaría en un hoyo fiscal de más de Q4,000 millones.

Bolaños y la cartera dirigida por el ministro Antonio Malouf insisten en un paquete de leyes de reactivación que muy bien tiene consecuencias de sacrificio fiscal de importancia, por lo que la auditoría social y la necesaria focalización en estos temas son una invitación al seguimiento, a conciencia, de su desarrollo y viabilidad, en virtud de

6. Sobre las implicaciones de esa nueva ley desde el punto de vista de los arrendatarios de vivienda, véase en esta misma edición el artículo de José Florentín Martínez López: "¿Panacea para la vivienda de interés social en arrendamiento?".

sus impactos sociales de diverso corte, incluyendo leyes laborales y demás.

El vórtice de la pandemia

Diferentes medios especializados, incluyendo a la reconocida revista médica *The Lancet*, han venido insistiendo en un multilateralismo de nuevo cuño que incluye, entre otros temas, el reconocimiento e investigación de las posibilidades de desarrollar una vacuna global anti COVID-19 y su adecuado tratamiento como bien público.

Impulsar la investigación en la dirección de una vacuna global afirma una nota de EFE (en Prensa Libre, 19 de febrero de 2021) sería rentable, en vista de que el costo de la pandemia actual – entre US\$8 mil millones y US\$16 mil millones–, es unas 500 veces superior a las sumas que deberían destinarse para crear una vacuna de este tipo, tema éste que economistas de la talla de Joseph Stiglitz han venido insistiendo: el reconocer plenamente a la vacuna como un bien público.

Pero mientras en el mundo bullen los intercambios de propuestas, en Guatemala el asunto de la vacuna se transformó en uno más de los ejemplos de la anomia estatal y del bajo perfil que la pandemia llegó a tener en la agenda gubernamental. Las notas de prensa han abundado en reflejar que Guatemala quedó anclada a espera más bien pasiva de la entrada de las dosis malamente conseguidas a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).⁷

Los suministros de Covax ha tenido los clásicos retrasos debido al lerd desempeño de su política exterior y el reconocimiento marginal y peso de Guatemala en el mundo, en donde los más cercanos amigos como Israel, Taiwán, Corea del Sur y los propios EE.UU. han priorizado a sus ciudadanos; conducta lógica pues, en el sistema de escogencia pública que priva, se anticipa cálculos de los futuros votos políticos en función del salvataje de almas, que han empezado en todos lados por la vacunación a los héroes de primera línea de los hospitales y centros de atención.

7. Véase, Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición digital 200: “De tropiezo en tropiezo, pero camina”, especialmente las páginas 9-11. Accesible en <http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2021/03/IPN-RD-200.pdf>

En todo caso, la actual coyuntura obliga a poner atención en los que saben y tienen amplitud de conocimiento en términos epidemiológicos. Un prolífico analista de estos asuntos, el Dr. Alfonso Mata, señala (La Hora 3 de marzo de 2021) que la COVID-19, como muchas de las plagas del siglo pasado, cae en la categoría de infección emergente. En la misma, como en los casos del SIDA o el Ébola, juega un notable papel la interacción con complejos factores ecológicos, sociales y de comportamiento.

Conocer tales factores es conocer el futuro, en virtud de que la ansiada etapa post-pandémica, aún lejana, no impedirá la recurrencia de coyunturas como la actual y la del 2020. Los factores de riesgo alcanzan una expansión mundial a rápidas velocidades, afirma el experto. Se debe desarrollar un enfoque de epidemiología integrada y estar preparado para infecciones emergentes.

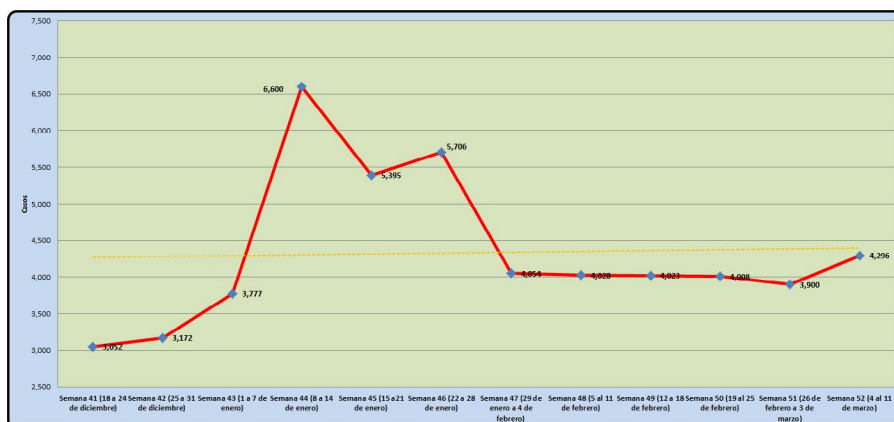
Pero en Guatemala, desde que ocurrió el primer caso de COVID-19 en territorio nacional (el 13 de marzo se cumplió un año), el sistema de salud pública ha venido trastumbando entre improvisaciones, tropiezos, veleidades protagonizadas gubernamentales y falencias estructurales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), aderezadas con incapacidad y corrupción. El seguimiento epidemiológico es insuficiente y las estadísticas oficiales no resultan confiables para conocer la gravedad de la situación y el impacto que sigue teniendo la epidemia de COVID-19.

Y a falta de otra fuente informativa, no puede menos que advertirse —a partir de la información del MSPAS— sobre los indicios de un repunte de los contagios al llegar al primer año doméstico de la epidemia, según puede observarse en las gráficas a continuación.

Gráfica 1

Casos nuevos por semana*

(Del 18 de diciembre de 2020 al 11 de marzo de 2021)



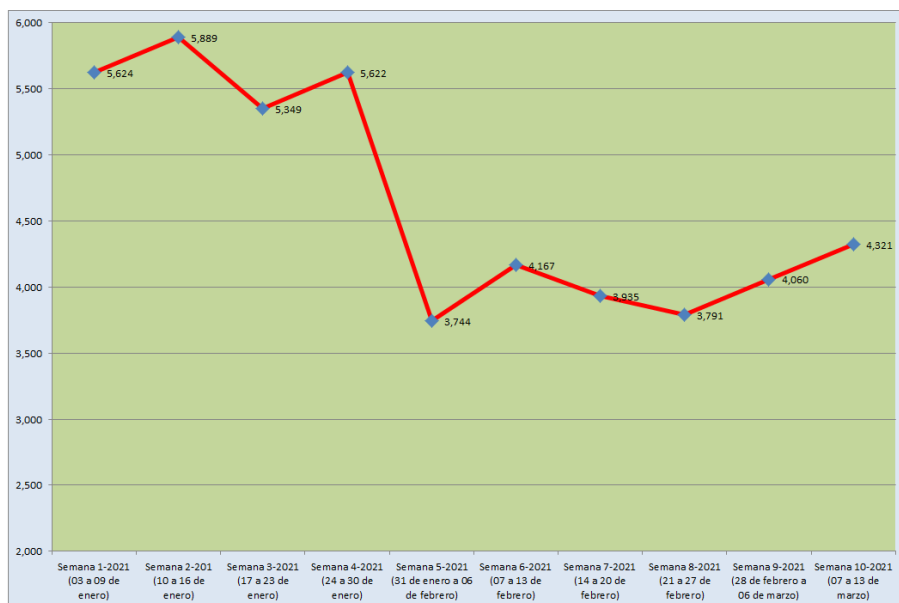
Fuente: elaboración propia, con base en datos del MSPAS.

*Nota: La primera semana de la epidemia en Guatemala fue entre el 13 de marzo (fecha del primer contagio en el país) y el 19 de ese mismo mes en 2020; aquí incluimos solamente las últimas doce semanas de la serie, siguiendo el correlativo iniciado en marzo de 2020.

En la primera Gráfica, que según se dice en la nota explicativa corresponde a la fase final del primer año completo de la epidemia, puede apreciarse cómo luego de un mes de estabilización hay en torno a cuatro mil contagios nuevos por semana, en la semana anterior al primer aniversario se produce un repunte, que llega a cuatro mil 296 casos nuevos entre el 4 y el 11 de marzo.

Ese comportamiento de los contagios, marcado por la sinuosidad observada en lo que va de 2021, puede apreciarse en la Gráfica 2, en la cual el recuento de casos nuevos se realiza según las semanas calendario del año en curso.

Gráfica 2
Casos nuevos de contagio por semana
Año calendario 2021



Fuente: elaboración propia, con base en datos del MSPAS.

La Gráfica 2 muestra que en enero se produjo la presunta “segunda ola” de la epidemia, alcanzado valores similares a los de julio-agosto de 2020 y reflejando, al parecer, la relajación de las medidas de precaución con motivo de las fiestas de fin de año. Aunque la disminución de casos nuevos reportada en la quinta semana del año (3,744 nuevos registros de contagio) resultaba alentadora, en las cinco semanas

siguientes se aprecia un comportamiento errático, pero en el cual tiende a predominar el repunte de casos.

Si bien no se logra visualizar en la gráfica, el dato preocupante es que los últimos dos días de la quincena (14-15 de marzo) sumaron 1,104 casos nuevos, de los cuales 971 correspondieron al lunes 15, para el resultado más alto en un solo día desde enero pasado.

El balance del primer año de la pandemia en Guatemala resulta finalmente negativo para el gobierno de Giammattei – que vio caer dramáticamente su credibilidad en esta materia– pero sobre todo fue negativo para la sociedad guatemalteca, que debió pagar un alto costo en vidas –6,546 decesos– y 181 mil 974 personas infectadas, oficialmente reconocidas como tales.⁸

8. Véase, Prensa Libre, sábado 13 de marzo de 2021.